

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 206/2020

PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil veinticinco, se da cuenta al **Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con el estado procesal del expediente. Conste.

Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil veinticinco.

Estudio sobre el cumplimiento de la ejecutoria.

Visto el estado procesal del presente asunto, se provee lo conducente respecto del análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en esta acción de inconstitucionalidad.

Para tales efectos, es importante precisar que el seis de junio de dos mil veintidós, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia bajo los siguientes resolutivos:

“PRIMERO. Es **procedente y fundada** la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. Se declara la **invalidez** del **artículo segundo** del Decreto número 107, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de abril de dos mil veinte, de conformidad con el **apartado VII** de esta decisión.

TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los **doce meses** siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Sonora, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de la respectiva consulta a las personas con discapacidad, ese Congreso deberá legislar en los términos precisados en los apartados **VII** y **VIII** de esta ejecutoria.

CUARTO. **Publíquese** esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. (...).”

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 206/2020

En el referido fallo se indicaron los siguientes efectos:

“94. En términos de los artículos 41, fracción IV; 45, párrafo primero; y 73 de la de la Ley Reglamentaria, las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad deberán establecer sus alcances y efectos fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda; así como, por extensión, invalidar todas aquellas normas cuya validez dependa de la norma invalidada.

(...)

96. Lo anterior determina que este Tribunal Pleno cuenta con una amplia discrecionalidad para salvaguardar eficazmente la norma constitucional o convencional violada. Por ello, este Tribunal Pleno ha tomado decisiones en que el efecto consistió únicamente en la expulsión de las porciones normativas que presentaban vicios de inconstitucionalidad; en otros casos, el efecto ha consistido en la expulsión de todo un conjunto armónico de normas dentro del ordenamiento legal impugnado e, inclusive, se han expulsado del orden jurídico nacional leyes u ordenamientos completos por existir violaciones muy graves a las normas que rigen el procedimiento para su creación. Asimismo, en ocasiones, el efecto de la sentencia se ha postergado por un lapso razonable y, en otros casos, el efecto ha consistido en la reviviscencia de las normas vigentes con anterioridad a las que han sido expulsadas del ordenamiento jurídico, para garantizar un mínimo indispensable de certeza jurídica.

97. Ahora bien, recientemente, al resolver la **acción de inconstitucionalidad 212/2020**, este Alto Tribunal cambió su criterio en el sentido de que, **en el supuesto de leyes o decretos que no son exclusivos o específicos en regular los derechos de personas con discapacidad, la falta de consulta previa no implicaba la invalidez de toda la ley o decreto**; es decir, el vicio en el procedimiento legislativo relativo a la falta de consulta que le da origen no tiene potencial invalidante de la totalidad de la ley o decreto, sino únicamente de determinados artículos.

98. Así, el Pleno de este Tribunal Constitucional determinó que en el supuesto de que una norma o un ordenamiento general no esté específicamente relacionado con los grupos de personas respecto de los cuales se debe realizar una consulta, esto es, que no se refieran única y exclusivamente a ellos, sino que, en el contexto general, estén inmiscuidos, las normas por invalidar son precisamente las que les afecten, pero sin alcanzar a invalidar toda la norma. **Por el contrario, cuando las normas se dirijan específicamente a estos grupos vulnerables, la falta de consulta invalida todo ese ordenamiento.**

99. Según se justificó en apartados previos, el Decreto 107 se integra por dos artículos que en conjunto afectan los derechos de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva. Sin embargo, por los motivos explicados, únicamente se tuvo por impugnado el **artículo segundo** del Decreto 107 que materialmente subsiste, en el que se reformaron dos fracciones del artículo 25 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora. En este sentido, dado que se alega la falta de

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 206/2020

consulta previa a personas con discapacidad respecto de una parte del decreto de reformas que en su totalidad regula aspectos relacionados con la educación de personas con discapacidad visual o auditiva, resulta aplicable lo resuelto en la **acción de inconstitucionalidad 212/2020**, por lo que el efecto invalidante será parcial.

100. Precisado lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria, la declaración de invalidez debe postergarse por **doce meses** con el objeto de que la regulación respectiva continúe vigente en tanto el Congreso del Estado de Sonora cumple con los efectos vinculatorios precisados a continuación, lo que permitirá, incluso, la eficacia de los derechos humanos a la consulta de las personas con discapacidad.

101. Tomando en cuenta que el Congreso del Estado de Sonora determinó regular las fracciones IV y V del artículo 25 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora, debe estimarse que la declaración de invalidez del referido decreto no se limita a su expulsión del orden jurídico, sino que conlleva la obligación constitucional de que el órgano legislativo local desarrolle la consulta correspondiente, cumpliendo con los parámetros establecidos en el **apartado VII** anterior y, dentro del plazo de postergación de los efectos de invalidez antes precisado, con base en los resultados de dicha consulta, emita la regulación que corresponda.

102. Por lo expuesto, se **vincula** al Congreso del Estado de Sonora para que dentro de los **doce meses** siguientes a la notificación que se le haga de los puntos resolutivos de esta resolución, fecha en que surtirá efectos la declaratoria de invalidez decretada, lleve a cabo, conforme a los parámetros fijados en el **apartado VII** de esta decisión, la consulta a las personas con discapacidad y posteriormente, dentro del mismo plazo, emita la regulación correspondiente.

103. Lo anterior, en el entendido de que la consulta no debe limitarse al decreto declarado inconstitucional, sino que deberá tener un carácter abierto, a efecto de otorgar la posibilidad de que se facilite el diálogo democrático y busque la participación del grupo involucrado en relación con cualquier aspecto regulado en la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora y en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, máxime que el contenido anterior de las normas que fueron reformadas en ambas leyes tampoco fue consultado previamente a las personas con discapacidad y de que este Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley Número 163 de Educación del Estado de Sonora al resolver la **acción de inconstitucionalidad 214/2020**.

104. El plazo establecido, además, permite que no se prive a las personas con discapacidad de los posibles efectos benéficos de las normas y, al mismo tiempo, permite al Congreso del Estado de Sonora atender a lo resuelto en la presente ejecutoria. Lo anterior, sin perjuicio de que en un tiempo menor la legislatura local pueda legislar en relación con los preceptos declarados inconstitucionales, bajo el presupuesto ineludible de que efectivamente se realice la consulta en los términos fijados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (...).

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 206/2020

De lo anterior, se desprende que la causa que generó la invalidez del Decreto combatido fue **la falta de realización de una consulta a las personas con discapacidad previo a la expedición del Decreto número 107**, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora.

Así, de una lectura integral de la sentencia, sus consideraciones, efectos y resolutivos, es posible advertir que su debido cumplimiento depende de que el Congreso de la Ciudad del Estado de Sonora¹ cumpla dos lineamientos concretos:

- a) Desarrollar la consulta a las personas con discapacidad; y
- b) Legislar en materia de desarrollo e inclusión de personas con discapacidad.

A) Realización de la consulta en materia inclusiva.

Como quedó indicado, la sentencia vinculó al Congreso estatal a realizar la consulta a las personas con discapacidad, como lo mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para posteriormente legislar lo correspondiente en la materia inclusiva con los ajustes que se estimen pertinentes.

Sobre dicho estándar, conviene realizar algunas precisiones.

El Tribunal Pleno, retomando la doctrina internacional existente sobre la materia, ha sostenido que los procesos de consulta a personas con discapacidad como mínimo su participación debe ser:

- a) **Previa, pública, abierta y regular.** El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la

¹ La notificación de los puntos resolutivos dictados en este expediente, contenidos en el oficio SGA/MOKM/190/2022, al Congreso del Estado de Sonora, tuvo lugar el quince de junio de dos mil veintidós, mediante el oficio 12637/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 206/2020

que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.

- b) **Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad.** Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.
- c) **Accesible.** Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser accesibles a las personas con discapacidad.

Además, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a esta como durante el proceso legislativo.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 206/2020

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.

- d) **Informada.** A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretenden tomar.
- e) **Significativa.** Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.
- f) **Con participación efectiva.** Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, entre otras.
- g) **Transparente.** Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 206/2020

organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.

Actuaciones de cumplimiento.

El Congreso informó a este Tribunal sobre las acciones encaminadas a demostrar la observancia de la sentencia; en ese sentido, se destaca lo siguiente:

En autos obran agregadas diversas invitaciones a los principales organismos e instituciones asistenciales en materia de discapacidad, de conformidad a la información proporcionada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora (DIF).

Asimismo, obra la publicación en uno de los principales diarios de mayor circulación en el Estado, la convocatoria al foro de consulta para la reforma a la Ley de Educación del Estado de Sonora y a la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en situación de Discapacidad en el Estado de Sonora, con el objetivo de participar conjuntamente en el proceso de elaboración y selección de propuestas de iniciativa de ley de mérito.

Se advierte que se llevaron a cabo **tres foros** de consulta. Uno en la ciudad de Hermosillo, otro en Navojoa, así como en Nogales, todas del Estado de Sonora; para lo cual el Congreso local remite diversas documentales, tales como, listas de asistencia y fotografías con las que sustenta la realización de dichos foros. A éstos, acudieron personas con discapacidad, sociedad civil, así como a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.

No se soslaya que realización de los foros de consulta fueron dirigidos tanto para las personas con discapacidad (**materia inclusiva**), así como para las personas indígenas (materia de educación).

Sin embargo, cabe precisar que la ejecutoria no impide la realización de consultas dirigidas a más de un sector de la población, sino lo que prevee el

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 206/2020

fallo constitucional es que estos sectores sean tomados en cuenta, previo a la expedición de un ordenamiento de carácter general que les afecta.

Posteriormente, la Comisión de Educación del Congreso local presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Sonora, para su análisis y dictamen correspondiente.

En esa tesitura, se advierte que se cumplieron con los distintos principios que rigen e integran el proceso de consulta en materia inclusiva; lo anterior, sin que sea factible verificar si la consulta es válida desde el punto de vista sustantivo, ya que no fue materia de análisis en la presente ejecutoria, toda vez que el vicio de constitucionalidad que se buscó subsanar fue la omisión en la realización de la consulta respectiva.

De ahí que el análisis de dicha consulta y reforma legal deben ser materia de una diversa acción de inconstitucionalidad.

B) Emisión de la legislación correspondiente.

Con base en los resultados de dicho proceso, el referido Congreso aprobó el Decreto 170 que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Sonora y de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en situación de Discapacidad del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro.

Lo anterior quedó acordado de conformidad en proveído de siete de agosto de dos mil veinticinco.

Determinación.

De lo anterior y del análisis integral de las constancias, se concluye que el Congreso de la Ciudad de México **dio debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito**, al haber:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 206/2020

a) Llevado a cabo un proceso de consulta conforme a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte; y

b) Emitido y publicado el Decreto de referencia, que sustituyó al diverso invalidado, con observancia al mandato convencional correspondiente.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 44, 46, párrafo primero y 50 de la citada Ley Reglamentaria, **se declara cumplida la sentencia dictada en el presente asunto.**

Archivo.

Derivado de lo anterior y toda vez que obra la totalidad de las notificaciones relativas a la sentencia y los votos formulados, con fundamento en los artículos 44, párrafo primero, 45, párrafo primero, 46, párrafo primero y 50 de la Ley Reglamentaria de la materia, **se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido.**

De conformidad con lo ordenado en autos la sentencia y los votos formulados fueron publicados en el Semanario Judicial de la Federación.²

Notifíquese por lista, por oficio a las partes, vía electrónica a la Fiscalía General de la República y en su residencia oficial a Poder Legislativo del Estado de Sonora.

En virtud que el **Poder Legislativo del Estado de Sonora** tiene su residencia fuera de esta ciudad, vía **MINTERSCJN** gírese el **despacho 1288/2025** al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para que en el plazo de **tres días** realice la notificación respectiva.

² <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/31287>

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 206/2020

Con la precisión al órgano jurisdiccional que al devolver el despacho únicamente debe remitir la constancia de notificación y la razón actuarial correspondiente.

Cumplase.

Lo proveyó el **Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, quien actúa con **Fermín Santiago Santiago**, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.

Esta hoja corresponde al acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veinticinco, dictado por el **Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, en la **acción de inconstitucionalidad 206/2020**, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. **Conste.**

IGP

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	HUGO AGUILAR ORTIZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	AUOH730401HOCGRG05			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a6633000000000000000000042ad	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	26/11/2025T04:18:36Z / 25/11/2025T22:18:36-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
		88 15 b3 e3 81 ce de 67 35 10 f1 92 d6 6f 4b f4 38 67 72 8d f5 34 49 7f ac 92 dc 24 47 5a aa 29 5d f5 9b 0f d1 e2 95 04 07 8c 8e c8 b4 46 a0 82 b8 35 15 a8 52 6c 3f b5 d0 66 a4 ae a6 e2 d0 a7 aa ee bc d5 b8 fd c3 5f 91 64 75 1a 12 1a ff e3 c2 46 71 d8 06 3a 9c 2c f4 c0 6e 8d 13 9a 7b 3e 42 3e 76 15 fe 7f 6e f0 8c 12 79 c0 70 91 d8 92 28 cd b1 67 11 da a7 81 ef 99 af 1e b7 6e 34 08 28 03 d9 cc 86 80 b9 0d 1b e7 79 3d 7c f6 34 8c 28 5e 4d 37 8b c5 5c 09 21 9e 88 d7 c3 17 fd 18 9d b6 93 d2 19 92 07 7a d2 52 0c 7c a9 ff 54 73 f5 20 cc 48 b5 b8 8c 1a bd 7a be b7 50 69 d0 a9 d3 79 4f 19 66 77 30 79 79 56 ac a3 b7 fc f4 9e a8 36 e4 b6 91 09 d2 73 72 c4 82 e0 6a b0 a7 71 90 b1 bd bc 70 3b 26 22 5a 48 4b e7 24 4c e2 4c ef 09 37 92 e9 a1 0f af 32 0a c2 a6 65 8c 7e a1 1d d0 af a1 58 fb 82 b3 0a 70 84 63 d0 09 97 11 6b a5 4b			
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	26/11/2025T04:18:37Z / 25/11/2025T22:18:37-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a6633000000000000000000042ad			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	26/11/2025T04:18:36Z / 25/11/2025T22:18:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	766315			
	Datos estampillados	E2FBD740FA0E16DC5C2A4898AB4D05A447629B614BBB26D670A06E9A08405FC6B6AA			

Firmante	Nombre	FERMÍN SANTIAGO SANTIAGO	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	SASF820211HOCNNR06			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a6633200000000000000000007587	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	25/11/2025T19:57:07Z / 25/11/2025T13:57:07-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
		7c ed 28 4d 79 f0 b0 90 d1 b0 c5 e2 db c1 04 16 24 97 40 dd b0 37 32 1e 3c 9b 7d ed 10 32 7e 23 b2 1e 0e 4e 0a b0 ab 82 6f 33 2f b3 0b d2 84 17 57 1a 4b 4d 78 a6 f7 42 3f 66 77 60 05 47 3b 44 87 e8 27 83 f0 46 b0 7a 40 53 67 f7 b3 0e ff b9 87 66 61 58 eb 23 93 70 ce 87 27 8c 45 ad 53 c0 13 5c 73 b9 ab 42 9a c8 6f 26 33 7a 0b a4 8a 3a 2f b6 b2 d5 53 d8 d2 c7 a9 d2 cc fc 43 dc aa 65 23 d0 b4 84 07 5c 02 40 76 03 95 bf fd 2e 3c 6a 9e 34 b5 75 82 e6 81 59 9d 63 42 c9 36 ec ac 38 cf fa 49 ed 3a e8 12 88 89 62 f2 05 59 38 95 d7 b1 15 a9 22 ac f8 5a 44 85 cd ea f2 e5 22 ba 08 1a a6 20 50 39 64 d0 f9 e7 12 f6 47 ef b3 9d a4 06 0f cd 42 fd 26 17 33 ca af 48 0f 21 07 e0 eb 3f 25 16 2e 89 30 73 ef 99 4f 1c 07 a5 38 f3 79 24 87 a0 bc c8 62 4d db 42 59 fe ed 4e fa 06 f0			
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	25/11/2025T19:57:07Z / 25/11/2025T13:57:07-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a6633200000000000000000007587			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	25/11/2025T19:57:07Z / 25/11/2025T13:57:07-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	764013			
	Datos estampillados	2E12C212E41CC2D359A0CC2F5D09B3871AEA2886377B4D9F47DDA0F7E77FBCF08BD			